

MOVILIZACIÓN ÉTNICA, DEMOCRACIA Y CRISIS ESTATAL EN LOS PAÍSES ANDINOS*

Ramón Pajuelo Teves
Instituto de Estudios Peruanos

Introducción

Durante estos días, en el Perú se desarrolla la operación UNITAS 45-2004. Se trata de un impresionante operativo militar impulsado anualmente por la marina norteamericana desde 1960. Desde hace cuatro años, el carácter binacional de la operación fue modificado bajo una nueva concepción multinacional, con el objetivo de alcanzar la “Solidaridad y defensa hemisférica”. Los ejercicios, en los cuales participan más de 13,000 soldados de catorce países del continente, se desarrollan durante un mes en zonas del litoral y la amazonía peruana, e incluyen el uso de munición verdadera en los ataques efectuados desde el aire, mar y tierra. Una de las maniobras realizadas este año es el denominado “ejercicio de manejo de crisis”, en el cual el enemigo es un levantamiento étnico que es debelado violentamente por los batallones multinacionales.

Este simulacro conlleva el mensaje de que los levantamientos étnicos constituyen un riesgo para la estabilidad política democrática de la región, y una amenaza latente para la permanencia de sus estados nacionales. Pero esta tesis no resulta exclusiva de algunos estrategias militares sobresaltados por los diversos conflictos étnicos que desde inicios de la década pasada parecen acompañar la intensificación de la globalización. Se puede encontrar también en diversos ámbitos académicos, políticos e intelectuales, y también es difundida por los medios de comunicación masiva.¹

¿Es cierto que en la región andina la movilización étnica constituye una amenaza para las democracias? ¿Cuál es el peso y la influencia de los movimientos étnicos en el contexto más amplio de crisis política y estatal que viven nuestros países? ¿Cuáles son los alcances y límites del protagonismo político que han alcanzado los movimientos indígenas durante las últimas décadas?

A fin de buscar respuestas a estas preguntas, en esta comunicación examino las imbricaciones entre la movilización étnica y la realidad política más amplia de los países centroandinos (Ecuador, Bolivia y Perú). Utilizo para ello una perspectiva retrospectiva de las mutaciones políticas de los diferentes movimientos étnicos, tomando sin embargo a las dos últimas décadas como foco temporal de análisis. Esto por el hecho de que en ese período se intensifica la crisis política, así como el protagonismo de los movimientos indígenas.

Asumo que las movilizaciones étnicas no resultan explicables por las características intrínsecas de los movimientos y las organizaciones indígenas, sino que las razones de sus trayectorias deben hallarse en las modalidades de interrelación con los contextos

* Ponencia presentada en el seminario organizado por la sección peruana de LASA y el IEP en el marco de las celebraciones por los 40 años del IEP. Lima, 7 al 9 de junio de 2004.

¹ Un ejemplo de ello son las declaraciones de Samuel Huntington y Mario Vargas Llosa, quienes previenen sobre el peligro democrático que significarían los movimientos étnicos en la región.

políticos más amplios en los cuáles actúan. Como refiere Jorge León para el caso ecuatoriano:

“no son las características particulares de los actores las que permiten comprender la excepción, sino el sistema político, el cual, por lo demás, se encuentra en plena mutación con diversas reformas políticas y cambios sociales de largo plazo que modifican los equilibrios regionales que están a la base de este sistema. Esta es una de las crisis que caracteriza al Ecuador actual” (León, 2001: 48).

De allí que centro la observación en las mutaciones de la movilización indígena, en relación con el grado de apertura étnica de los estados.

Resulta necesaria una breve precisión final. El análisis se centra en los tres países del área central de los Andes, por el hecho de que se trata de países bastante semejantes (además de contiguos). De hecho, no sólo comparten una trayectoria histórica común, sino que en sus territorios reside una de las poblaciones indígenas más importantes.

1. Transformaciones y crisis

En un estudio reciente sobre la situación de la democracia en América Latina, Guillermo O'Donnell encuentra que “en las dos últimas décadas el estado se ha debilitado enormemente y, en algunas regiones de estos países, virtualmente se ha evaporado. Crisis económicas, la furia antiestatista de muchos de los planes de ajuste económico, corrupción y clientelismo ampliamente extendidos -estos y otros factores- han contribuido en generar un estado anémico” (O'Donnell, 2004:49). Algunas manifestaciones de esta situación, que el mismo autor se encargó de señalar hace una década (O'Donnell,1993), y que por tanto deben haberse agravado en gran medida hasta nuestros días, serían las siguientes:

- a) Una suerte de “evaporación” del estado, reflejada en su creciente deterioro institucional, su ineficacia administrativa y funcional, así como en la pérdida de soberanía territorial reflejada en el incremento de “zonas marrones” existentes por fuera de la legalidad estatal o relacionadas intermitentemente con ella.²
- b) El afianzamiento de “ciudadanías de baja intensidad” basadas en la reducción del acceso de la población a los derechos civiles y políticos. Esto afecta sobre todo a los sectores populares, cuya condición ciudadana muestra un claro retroceso respecto a la tendencia de expansión de la ciudadanía predominante en las décadas anteriores.

² Según O'Donnell estas “zonas marrones” consisten en circuitos sociales y territoriales de poder de carácter informal, patrimonial y/o mafioso que funcionan bajo las reglas de juego de una legalidad distinta a la del estado, constituyendo una suerte de “regímenes autoritarios subnacionales” que coexisten con los regímenes democráticos formales de nivel nacional. En América Latina, como ejemplo extremo de esta situación, puede mencionarse el caso del régimen conocido como Fujimorismo (1990-2000), en el cual las “zonas marrones” terminaron corroyendo la propia estructura institucional del estado, hasta llegar a constituir la más extensa y duradera red de corrupción de toda la historia republicana del Perú.

Lo que resulta sorprendente es que esto ha ocurrido paralelamente a la expansión de la democracia política en la región; pues en las dos últimas décadas ésta ha alcanzado un nivel sin precedentes en toda la historia previa.³

La denominada “tercera ola” democratizadora, entonces, ha alcanzado un fuerte afianzamiento en América Latina. Sin embargo, el proceso de expansión democrática ha coincidido con dos fenómenos que ayudan a comprender porqué, paralelamente a la expansión democrática, crecen la debilidad estatal y la crisis de legitimidad política, mientras que la ciudadanía entró a una situación de franco retroceso.

El primero de estos factores es el proceso de neoliberalización de la sociedad y del estado, cuyas expresiones más conocidas han sido los ajustes estructurales, los impulsos hacia la modernización estatal y la expansión del libre mercado. Ello ha transformado profundamente las condiciones de clasificación social de la población y los rasgos de sus identidades socioculturales.⁴ El segundo fenómeno es la acentuación de la globalización, cuyo correlato sobre la soberanía estatal es bastante conocida.

Uno de los fenómenos políticos asociados a este contexto de transformación estructural, es la denominada crisis de representación democrática. En los países andinos, la crisis de representación parece ser consecuencia del cambio de las formas y condiciones de interacción entre las esferas particulares de la política, la sociedad y la economía; cambio ocurrido en el contexto de neoliberalización y globalización del capitalismo, pero que en última instancia se explica por razones inherentes a la propia esfera política.⁵ En torno a la crisis de representación democrática se ha suscitado un importante debate, así como una extensa bibliografía.⁶ Dos de los temas más debatidos son la pérdida de legitimidad de las instituciones políticas -entre ellas, de los partidos políticos, que han tocado fondo en varios países- así como el surgimiento de nuevas fuerzas que, en mayor o menor medida, han logrado irrumpir en las arenas políticas oficiales.

³ Como indica el reciente informe del PNUD sobre la democracia en América Latina, la totalidad de los países latinoamericanos tienen actualmente regímenes democráticos, mientras que hace veinticinco años sólo tres países mostraban dicha característica (PNUD, 2004: 34).

⁴ Las diferencias sociales ahora son abismales que hace dos décadas. En el Perú, por ejemplo, mientras se han fortalecido las nuevas capas de sectores altos acomodados vinculados directamente a la expansión empresarial producida por la economía de mercado, las clases medias sufren la estrechez de sus previas colocaciones en el estado y el mercado, en tanto los sectores populares urbanos y rurales viven inmersos en un mar de pobreza y extrema pobreza que se ha acentuado dramáticamente desde la imposición del modelo neoliberal. Esto no quiere decir que no haya habido movilidad social en los sectores medios y populares (de hecho, existe una nueva clase media acomodada, así como nuevos sectores medios económicamente pujantes en los conos populares de la gran Lima, pero carecemos de información que de luz sobre la verdadera magnitud de estos cambios).

⁵ Al evaluar la situación de la democracia en los países andinos, Martín Tanaka (2002 y 2003), remarca la necesidad de pensar la política en términos políticos, dejando así de suponer que las vicisitudes de la democracia dependen de las condiciones estructurales sociales y económicas, antes que de la propia transformación de la política y de sus relaciones con estas esferas.

⁶ Se trata de uno de los temas más intensamente debatidos durante las últimas décadas, y de uno de los más problemas más fecundos para las ciencias sociales latinoamericanas,

Es en ese contexto de decisivas transformaciones, durante las dos últimas décadas, que los movimientos indígenas han logrado “saltar” de la esfera social al escenario de la política, constituyente actualmente – al menos en los casos de Ecuador y Bolivia- uno de los actores más importantes de ella.

2. Ecuador

El suceso que constituye el punto de quiebre en el desarrollo de la movilización étnica en el Ecuador fue el primer levantamiento indígena de junio de 1990. Hasta ese momento, las más importantes organizaciones indígenas tenían una larga trayectoria de luchas locales y regionales,⁷ incluso habían logrado constituir en 1986 una central nacional: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), pero ésta todavía no representa a un movimiento social en el sentido preciso del término.⁸ El levantamiento logró paralizar al país y obligó al gobierno de Rodrigo Borja a negociar con los dirigentes de la CONAIE la plataforma de lucha denominada “Mandato por la Vida”. Significó la irrupción pública del movimiento indígena como un actor social y político bastante influyente. El conflicto étnico evidenciado en el levantamiento indígena y encarnado en las demandas de la CONAIE, emergía así al primer plano del escenario político del país, agregando un ingrediente inesperado al campo de fuerzas políticas: la aparición de los indios como un sujeto colectivo con la suficiente fuerza para jaquear al estado, y con la capacidad de formular un discurso frontalmente cuestionador del modelo nacional basado en el mestizaje y la integración, predominante hasta ese momento.

Como consecuencia del levantamiento, el estado ecuatoriano se vio en la necesidad de asumir un nuevo ciclo de apertura étnica. El período anterior, caracterizado por un leve interés en la solución del conflicto étnico a través de la aplicación de las reformas agrarias de 1964 y 1973,⁹ quedó atrás. Desde la irrupción pública del movimiento indígena, el estado dio muestras tangibles de atención a las demandas étnicas. Fue así como se entregó a la CONAIE el control de los programas nacionales de educación bilingüe.

⁷ Es el caso de las organizaciones amazónicas constituidas desde fines de la década del 60, como la Federación Shuar, y articuladas desde 1980 en una central regional: la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana). Asimismo, también era el caso de diversas organizaciones regionales de la sierra ecuatoriana, articuladas desde 1972 en la central regional ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac Riccharimui o Despertar de los indios del Ecuador). Sobre el proceso organizativo de las organizaciones indígenas ecuatorianas véase: CONAIE, 1989; y ECUARUNARI, 1998.

⁸ Es decir, en el sentido definido por Touraine: como un momento de las luchas por el poder e

⁹ En Ecuador, las reformas agrarias de 1964 y 1973 no fueron resultado de un extenso movimiento campesino de lucha por la tierra como el que existió en el Perú y Bolivia, sino más bien de un cuidadoso plan estatal de modernización agraria que requería la eliminación de los restos del latifundio y el huasipungo, los cuales se hallaban en desintegración desde hacía décadas. Lo que dichas reformas buscaban era alentar el desarrollo del capitalismo agrario; por ello, las tierras afectadas fueron las del estado y la iglesia, sobre todo. Los latifundios de particulares fueron impulsados a convertirse en modernas empresas agrarias, a través de la capitalización con fondos estatales. De allí que en diversas zonas del campo ecuatoriano es posible hallar comunidades indígenas colindantes con empresas modernas dedicadas a la agroexportación (El mejor estudio sobre la reforma agraria ecuatoriana sigue siendo Barsky, 1988).

Apertura étnica y consolidación del movimiento indígena

Después de junio de 1990, la CONAIE realizó diversos actos de protesta que alcanzaron mucha resonancia e impulsaron el mayor desarrollo del movimiento indígena. Diversas acciones de protesta desarrolladas por la CONAIE, tensaron aún más las relaciones con el estado, empujando a éste a institucionalizar su apertura étnica. Entre estas acciones de protesta destacan: las movilizaciones de 1992 efectuadas en el marco de la campaña por los “500 años de resistencia indígena”, la marcha de la Organización de Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP) por el reconocimiento de sus territorios, y el levantamiento indígena de 1994 en contra del intento del gobierno de Sixto Durán Ballén por imponer una nueva ley agraria de inspiración neoliberal.

Estas luchas resultaron exitosas. Si el levantamiento de 1990 había significado la aparición pública de la CONAIE como un poderoso actor social y político, las acciones posteriores le permitieron mostrar que su protesta no era efímera de ninguna manera. La campaña por los 500 años le otorgó a la CONAIE una plataforma internacional que refrendó su rápido posicionamiento en la arena política interna. La marcha amazónica por los derechos territoriales permitió un logro territorial concreto que tuvo un fuerte efecto ejemplarizador sobre el resto de pueblos indígenas, pues el estado procedió a la adjudicación de un territorio de más de un millón de hectáreas para los pueblos del Pastaza. Además, la lucha contra la nueva ley agraria mostró que el movimiento indígena podía bloquear las tendencias a la neoliberalización en el campo.

Adicionalmente, se fueron estableciendo ciertas reglas de juego tácitas para la administración del conflicto étnico. Fue institucionalizándose una dinámica bastante precisa en la relación entre el estado y el movimiento indígena, que resultó eficaz para procesar (al menos parcialmente) las demandas étnicas. Esta dinámica tuvo los siguientes pasos: la protesta indígena era seguida por un período de negociación que generalmente finalizaba con la aceptación de una parte de las demandas, lo cual, si bien no absolvía el conjunto del problema, permitía dar término a la protesta. De este modo, el desarrollo del conflicto entre el estado y el inesperado actor étnico articulado por la CONAIE, reprodujo una lógica que había funcionado antes en el conflicto entre el estado y otros sectores sociales movilizados, como fue el caso del movimiento sindical urbano.

Crisis del estado y del régimen político

Desde mediados de la década del 90, el patrón de resolución del conflicto étnico comenzó a agotarse debido a que la CONAIE pudo confluir con otros sectores sociales, logrando impulsar luchas más amplias que aquellas definidas exclusivamente en términos étnicos. Otra vez, esto no sólo fue resultado de la mutación interna del movimiento indígena, sino que también expresó las transformaciones del escenario político mayor. Para entonces, ya se había profundizado la implantación del neoliberalismo, sobre todo desde el gobierno de Durán Ballén. La creciente crisis económica, así como la crisis de representación política, se fueron haciendo cada vez más evidentes. Ello fue catalizado políticamente por el liderazgo de tintes populistas de Abdalá Bucaram, quien una vez llegado al poder pareció dejar atrás sus encendidos discursos a favor los pobres y en contra de los “oligarcas”, desarrollando una gestión

que continuó el programa neoliberal, pero que además estuvo salpicada de escándalos que muy pronto mellaron su popularidad.

Esa coyuntura determinada por la acentuación de la crisis económica y la pérdida de legitimidad política estatal, facilitó la confluencia de la CONAIE y diversos sectores sociales urbanos, conformándose un frente que condujo las movilizaciones que derrocaron a Bucaram en febrero de 1997. Otro factor que no debe desestimarse es la presencia del Movimiento Pachacutik, el brazo político electoral del movimiento indígena conformado en 1996, que en las elecciones de ese año había logrado alrededor del 20% de la votación nacional y el 10% del total de escaños del parlamento.

El agravamiento de la crisis económica, así como la inestabilidad política que siguió al derrocamiento de Bucaram, mostraron el agotamiento definitivo de los rezagos del modelo nacional-populista. Ante la coyuntura crítica del país, se hizo necesaria la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Fue la ocasión que el movimiento indígena esperaba para buscar la aprobación de su propuesta plurinacional formulada años atrás (CONAIE, 1994). Sin embargo, los partidos políticos bloquearon dicha posibilidad, arrinconando a los seis representantes electos del Movimiento Pachacutik. A pesar de que la tesis indígena de la plurinacionalidad fue rechazada, la nueva constitución incluyó un capítulo especial sobre los derechos colectivos indígenas que es uno de los más avanzados en la legislación de los países andinos.

La importante participación de la CONAIE y el Movimiento Pachacutik en la coyuntura política que desembocó en la Asamblea Constituyente, mostró la transformación que cambió la faz del movimiento indígena desde su irrupción pública en 1990: había dejado de ser un actor social que enarbolaba demandas étnicas, para convertirse en un actor político con demandas nacionales. La mecánica de dicha transformación, reúne tanto aquellos factores referidos al sistema político en su conjunto (el debilitamiento del estado por las crecientes presiones neoliberales y de la globalización, y la crisis de los partidos políticos), como las propias mutaciones internas del movimiento (sin dejar de ser una malla organizativa étnica, logró constituirse en un movimiento social con demandas más amplias, y al mismo tiempo pudo desarrollarse como un actor político representado por el Movimiento Pachacutik).

Posteriormente, el gobierno de Mahuad no logró enfrentar las tendencias económicas y políticas que parecían conducir al país al colapso. Por el contrario, continuó acelerando la neoliberalización, lo cual lo cual generó un nuevo levantamiento indígena en 1999. Pero la gota que derramó el agua del vaso fue el estallido de la crisis financiera. Ante la quiebra del sistema bancario y el escalamiento de los precios, el gobierno buscó imponer la dolarización del país. Esa situación generó los controvertidos sucesos del 21 de enero del 2000 que terminaron con el derrocamiento de Mahuad, en medio de los cuales el presidente de la CONAIE logró llegar a la cúspide del poder por algunas horas como parte de un triunvirato, antes de que éste fuera removido por un contragolpe de estado militar que colocó en el poder al vicepresidente Gustavo Noboa. La alianza entre la cúpula dirigencial indígena con un grupo de aproximadamente 120 coroneles del ejército y otros sectores sociales (por cierto, sumamente debilitados, como la Coordinadora de Movimientos Sociales), fue bloqueada por las fuerzas armadas, que de esa manera respaldaron la implementación de la dolarización.

El cierre de la apertura étnica

En 1990, Andrés Guerrero (1993:101) culminaba un artículo preguntándose si el estado ecuatoriano sería capaz de integrar o incluir en sus fueros a los nuevos ciudadanos-étnicos surgidos con el levantamiento indígena, en la medida que éstos traían consigo un proyecto de transformación plurinacional del estado que constituía una profunda reformulación de los fundamentos históricos constitutivos de la nación ecuatoriana.

Una década y media después, la situación es sumamente distinta. Debido al desarrollo de la movilización étnica, el estado ecuatoriano tuvo que procesar una verdadera mutación. Frente al asedio de la movilización indígena, logró ser capaz de abrirse a la presencia de los nuevos actores étnicos y de integrarlos al juego político. Pero sólo en cierta medida ha respondido a las principales demandas que éstos traían consigo. Así, si bien ha sido suficientemente permeable para lograr integrar políticamente a los representantes indígenas, tanto en los niveles locales como nacionales de representación (desde los municipios cantonales hasta la participación en el gobierno nacional), ha mantenido su resistencia frente al principal anhelo indígena: el reconocimiento del carácter plurinacional del estado ecuatoriano. ¿Cómo pudo ocurrir esto?

El factor fundamental de esta mutación no se halla en el terreno exclusivo de la insurgencia étnica; es decir, en la capacidad del movimiento indígena para desarrollar luchas y formular demandas dirigidas al reconocimiento étnico. Reside más bien en un juego de doble vía que constituye un rasgo esencial del proceso político ecuatoriano posterior al levantamiento de 1990: de un lado, en la orilla estatal, ocurrió una impresionante apertura ante la movilización étnica, la cual no se restringió al estado sino que permeó al conjunto del sistema político; de otro lado, en la orilla de la movilización étnica, ocurrió una paulatina ampliación del carácter de las demandas y motivaciones políticas, de suerte que la plataforma étnica se fue abriendo cada vez más, al punto de lograr dimensiones propias de un movimiento nacional más amplio. Esto se ha visto con claridad en el levantamiento indígena de enero-febrero del 2001, cuyo carácter (se trató de un levantamiento en contra de la aplicación de un nuevo paquete neoliberal) fue expresado muy bien en el lema: “nada sólo para los indios”.

Pero volvamos a los sucesos del 21 de enero. El resultado de la participación del movimiento indígena en dichos acontecimientos, fue una profunda crisis interna, así como la pérdida de su credibilidad política entre diversos sectores de la opinión pública. Desde el estado se fueron cerrando, asimismo, las compuertas de la apertura étnica iniciada en el lejano levantamiento de 1990. Un nuevo levantamiento, ocurrido a fines de enero del 2001 en protesta por la aplicación de un nuevo paquete neoliberal que incluía el alza de los precios de los combustibles, fue el suceso que mostró el cierre de la apertura estatal a las demandas étnicas. A diferencia de lo ocurrido en los anteriores levantamientos indígenas, la reacción estatal fue sumamente violenta. Las distintas organizaciones indígenas (como la FENOCIN, la FEINE y la CONFEUNASSC), dejaron de lado sus diferencias y cerraron filas con la CONAIE, obligando al gobierno a iniciar negociaciones que se prolongaron durante varios meses, sin resultados concretos.

Las elecciones del 2002 trajeron consigo una verdadera sorpresa: la alianza entre el coronel Lucio Gutiérrez la CONAIE logró el triunfo en las elecciones, con lo cual el movimiento indígena logró llegar a ser parte del gobierno. Sin embargo, la luna de miel

entre Gutiérrez y sus aliados indígenas no tardó más que unos cuantos meses. La manzana de la discordia fue el continuismo del modelo neoliberal, a lo cual el movimiento indígena se opuso frontalmente, pero sin salirse del gobierno, hasta que Gutiérrez decidió dar término a dicha alianza.

La situación resultante posterior es, de alguna manera, la que prevalecía antes de las elecciones: mientras que el gobierno sigue al pie de la letra las recetas neoliberales, las organizaciones indígenas siguen oponiéndose a éstas. Sin embargo, debido justamente a su participación gubernamental, el movimiento indígena carece de la convocatoria suficiente para lograr articular un bloque más amplio capaz de llevar adelante medidas de protesta eficaces. Entretanto, subsisten graves problemas internos que han afectado fuertemente a las organizaciones. Esto ocurre, además, en un contexto en que el gobierno, aprovechando la debilidad del movimiento indígena, parece decidido a terminar de cerrar la apertura étnica estatal: en estos días busca arrebatarle a la CONAIE el control de la educación bilingüe, así como de los programas de desarrollo manejados a través del CODENPE.

3. Bolivia

En Bolivia, a diferencia del Ecuador, las luchas indígenas de las últimas décadas no tienen una línea de continuidad clara. Se trata de oleadas de movilización étnica, a veces completamente diferenciadas entre sí, que hacen más necesario el uso del plural; es decir, que se requiere hablar de varios movimientos indígenas y no de uno solo.

Movimientos indígenas, contextos políticos y apertura étnica

El movimiento étnico pionero en la Bolivia contemporánea fue, indudablemente, el katarismo. El proceso que condujo a este movimiento desde su surgimiento a fines de la década de los 60 e inicios de los 70, hasta su diversificación política y –en la práctica– su desaparición a inicios de los 80, ha sido objeto de diversos trabajos que no es necesario resumir detalladamente aquí.¹⁰ Basta con destacar los principales hitos de dicha trayectoria. El katarismo –así como el resto de sucesos sociales de Bolivia durante la segunda mitad del siglo XX– no puede comprenderse sino es en relación con las consecuencias de la revolución de 1952. Se trató de un movimiento de reivindicación étnica que surgió casi clandestinamente, entre la población aymara urbana y rural del altiplano, y que se fue expandiendo en oposición a la estructura sindical campesina construida desde el estado. Un momento inicial del movimiento correspondió a su surgimiento y rápida expansión; cuyo punto más alto fue la presentación de la declaración de Tiawanaku en 1973. Posteriormente, hasta fines de esa década, durante la larga dictadura de Bánzer, el katarismo se replegó debido a la fuerte represión. Pero reemergió con toda fuerza durante la coyuntura de lucha por la recuperación democrática de fines de los 70, durante la cual logró desplazar a las organizaciones agrarias predominantes, constituyéndose en el principal referente del campesinado aymara de Bolivia, mediante la creación de la CSUTCB en 1979. A pesar de ello, durante el período abierto con el retorno a la democracia, su presencia fue eclipsándose debido al fracaso de su participación electoral, y a la ruptura de sus varias vertientes, que en el contexto democrático se constituyeron en organizaciones diferenciadas.

¹⁰ Al respecto, véase Hurtado (1986) y Rivera Cusicanqui (1983).

El suceso que marcó a la política boliviana en la primera mitad de la década del 80, fue el fracaso del gobierno de la UDP. El presidente Hernán Siles Suazo se vio obligado a adelantar las elecciones ante la crisis económica y el derrumbe de su credibilidad, arrastrando consigo al conjunto de la izquierda, e incluso al movimiento katarista.

Posteriormente, con la elección de Víctor Paz Estensoro, se abrió una nueva etapa política cuyo rasgo principal fue la implementación del famoso decreto 21060 de 1985, conocido como el decreto de la Nueva Política Económica. En síntesis, se trataba de una medida que buscaba suplantarse el modelo estatal-nacionalista heredado de la revolución de 1952, reemplazándolo por el modelo neoliberal. La nueva política económica neoliberal significó el desmantelamiento de la economía estatal (privatización de las empresas), así como el despido (denominado relocalización) de más de 20,000 trabajadores que engrosaron las filas del desempleo urbano y de la huída hacia el trópico, es decir, de las oleadas de trabajadores que migraron hacia la selva, convirtiéndose en cocaleros y colonizadores.

Es así como en las zonas tropicales, específicamente en el Chapare cochabambino, se fue constituyendo desde la segunda mitad de la década del 80 un nuevo movimiento social compuesto por los productores cocaleros. El detonante de la formación de este movimiento fue la represión del cultivo de la coca por parte de los gobiernos de Bolivia y los EEUU. La represión atizó la formación de diversos sindicatos locales de productores, que fueron confluyendo hasta conformar diversas confederaciones que, ya en los 90s, confluyeron en un poderoso movimiento cocalero liderado por Evo Morales, indígena aymara originario de la zona de Oruro cuya familia migró al Chapare en búsqueda de empleo. Uno de los rasgos más interesantes del movimiento cocalero es la formulación de un discurso basado en simbologías étnicas, que ha logrado convertir a la coca y a la wiphala (la bandera de siete colores) en el símbolo de su lucha.

Hacia fines de la década de los 80, en la escena política boliviana emergió otro movimiento étnico, compuesto por los pueblos indígenas de las tierras bajas. El origen de este movimiento se halla en la acción de actores externos como diversas ONGs y las iglesias, que fueron inculcando entre los pueblos amazónicos la necesidad de organizarse para defender sus derechos. Fue así como se conformó la Central Indígena del Oriente Boliviano y luego la Asamblea del Pueblo Guaraní. Pero el acto fundacional de dicho movimiento fue la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, que condujo a los manifestantes desde los llanos amazónicos hasta La Paz, con un fuerte impacto público. Posteriormente, estas organizaciones buscaron la creación de un referente político, que debía ser alcanzado en octubre de 1992, con la realización de una asamblea de nacionalidades. Sin embargo, las divisiones entre las diversas organizaciones, así como la imposibilidad de una articulación con las organizaciones indígenas de las demás regiones del país, terminaron por aislar a quienes buscaban la formación de dicha asamblea.

Además de los procesos organizativos internos de los pueblos originarios, un elemento que favoreció la formación del movimiento de dichos pueblos de tierras bajas, fue la permeabilidad y hasta simpatía del estado frente a muchas de sus demandas. Hacia fines de la década del 80, dicha apertura estatal no era una excepción. Entre diversos actores políticos y sociales (como los partidos, las organizaciones gremiales y las ONGs), había

calado fuertemente el discurso del movimiento katarista, cuyas tesis en torno a la formación de un país plurinacional contaban tardíamente con un amplio respaldo.

Durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, la apertura estatal a las demandas étnicas alcanzó su punto más alto. Fue así como un dirigente histórico del movimiento katarista, Víctor Hugo Cárdenas, llegó a ser Vicepresidente de la República. Se impulsaron entonces diversos procesos de reforma, como la Ley de Participación Popular que implicó la creación de más de 300 municipios, y la Reforma Educativa que impulsó la educación bilingüe intercultural. Sin embargo, también se aceleraron las transformaciones neoliberales. La formulación de una nueva ley agraria conocida la Ley INRA, de inspiración neoliberal, enfrentó directamente al gobierno con las organizaciones agrarias e indígenas, sobre todo con la CSUTCB, que convocó a una masiva marcha de 40,000 campesinos en contra la aprobación de dicha Ley.

Acentuación de la crisis y emergencia de nuevos movimientos étnicos

Desde el retorno al poder de Hugo Bánzer en 1997, parece cerrarse el ciclo de apertura étnica abierto a inicios de la década del 80. El diálogo y la negociación fueron reemplazados por la mano dura y la represión abierta, como ocurrió en el caso del Chapare, donde el conflicto entre el estado y el movimiento cocalero se agudizó fuertemente. Bánzer, así como su sucesor Jorge Quiroga, dieron impulso a una serie de reformas neoliberales de segunda generación, destinadas al desmantelamiento de lo poco que quedaba del estado instaurado en 1952 (como algunas empresas públicas que no tardaron en ser privatizadas).

Entre la población, la agudización de la crisis económica, así como las reformas implementadas, fueron generando un agudo rechazo, y cierto sentimiento de defensa del nacionalismo instaurado en 52.

Como parte de dicho clima nacionalista, al interior de la CSUTCB, poco a poco fueron ganando terreno diversas vertientes de recuperación del discurso katarista, que fueron desplazando en los sindicatos de base a los dirigentes de origen quechua. Fue así como en 1998, en medio de una disputa por el control de esta organización entre los dirigentes Evo Morales y Alejo Véliz (el primero del Chapare y el segundo de Cochabamba), emergió el liderazgo de Felipe Quispe, dirigente aymara conocido como el mallku, que se convirtió en el flamante Secretario General de esa organización.¹¹

Desde su posición como principal dirigente de la CSUTCB, Felipe Quispe ha logrado articular un importante movimiento de reivindicación comunitaria aymara que tiene sus bases entre las comunidades del altiplano. Desplegando un encendido discurso étnico que busca la reconstrucción del Qollasuyu, así como la “reindianización” de los blancos o q’aras, ha logrado también una fuerte notoriedad pública.

En setiembre del 2000, Quispe y sus seguidores constituyeron el Movimiento Indígena Pachacutik, con el cual logró llegar al parlamento en las elecciones del 2002. El MIP mantiene, asimismo, el control de diversos municipios en el altiplano aymara.

¹¹ Felipe Quispe fue uno de los principales dirigentes de una vertiente radical del katarismo, los ayllus rojos, que a inicios del 90 pasó a formar el Ejército Guerrillero Tupas Katari (EGTK) y a desarrollar acciones armadas. Por ello, Quispe fue apresado y estuvo cinco años en prisión.

A diferencia de Felipe Quispe, que mantiene un discurso confrontacional centrado en las diferencias étnicas y sociales entre “indios” y “qaras”, Evo Morales ha desarrollado un discurso más amplio, que enfatiza en la necesidad de recuperar y refundar la nación boliviana para que todos sus habitantes tengan lugar con sus propias especificidades sociales y culturales. Reverbera en dicho discurso la lejana propuesta plurinacional del movimiento katarista, pero engarzado en un proyecto que intenta ser nacional y popular al mismo tiempo que étnico.

Durante las elecciones del 2002, Evo Morales estuvo a punto de ser elegido presidente, al postular como candidato del Movimiento al Socialismo (MAS). Su elección fue bloqueada por el boicot de la embajada norteamericana, así como el acuerdo político que recolocó en el poder a Gonzalo Sánchez de Losada.

Fin de un ciclo estatal, crisis del sistema político y nuevos actores étnicos

Actualmente, Bolivia vive un proceso sumamente incierto y complejo de transformación política: el fin del ciclo estatal establecido como consecuencia de la revolución de 1952. En dicho contexto, el primer remezón que el sistema político debió soportar fue la adecuación del estado al modelo neoliberal desde mediados de la década del 80. Entró en crisis, así, el monopolio político de los partidos constituidos como parte del estado emenerista.

El otro fenómeno que ha sacudido al sistema político es el surgimiento de nuevos actores sociales y políticos que están desarrollando fuertes protestas. El protagonismo lo tienen los nuevos movimientos étnicos (el movimiento cocalero de Evo Morales y el movimiento comunal aymara de Felipe Quispe). Pero el campo de fuerzas es bastante más amplio y complejo, e incluye otros movimientos rurales y urbanos de reciente creación (es el caso de la Coordinadora por el agua de Cochabamba, el Movimiento de los Sin Tierra y el movimiento de residentes urbanos de la ciudad de El Alto). Se observa también la reaparición de algunos actores importantes del ciclo político anterior (como los mineros agrupados en la Central Obrera Boliviana y las Federaciones de maestros rurales y urbanos).

La escalada de protestas ocurridas durante los últimos años ilustran la gravedad de la crisis del sistema político boliviano: la “guerra del agua” de inicios del 2000 contra la privatización del agua en Cochabamba; los levantamientos y bloqueos indígenas convocados por Evo Morales y Felipe Quispe en setiembre de 2000 y julio del 2001; la crisis del “febrero negro” del 2003 desencadenada por el intento de aplicación de un “impuestazo”; y finalmente, la “guerra del gas” de setiembre del 2003 que culminó con la destitución del presidente Sánchez de Losada.¹²

El enfrentamiento a balazos entre militares y policías ocurrido en febrero de 2003 en plena Plaza Murillo (sede de los principales poderes del país), ilustra el agotamiento del modelo de estado nacido en 1952 y de sus principales mecanismos de intermediación: el prebendalismo político, el clientelismo, el corporativismo y el tutelaje estatal sobre las

¹² La bibliografía sobre estos sucesos es creciente. Para una visión general véase: García Linera y otros (2000 y 2001), Laserna y otros (2002), Calderón (2002), Archondo y otros (2003) y Pinto (2003),

organizaciones sociales. Desde 1952, el estado boliviano se sustentó en estos mecanismos, que permitieron el control y distribución de los ingentes recursos provenientes de la explotación y exportación minera a los diferentes sectores sociales. Este modelo de intermediación comenzó a estallar desde los años 80, coincidentemente con el retorno democrático, teniendo como trasfondo la caída internacional de los precios del estaño. Durante los gobiernos de Hernán Siles Zuazo y Víctor Paz Estenssoro, se intentó suplir la carencia de divisas mediante la implementación sucesiva de reformas neoliberales, las cuales aceleraron la ruptura de los compromisos y las alianzas del pacto revolucionario del 52.

Actualmente, un renovado movimiento indígena, compuesto básicamente por dos vertientes (la cocalera expresada en el MAS y la comunitaria aymara expresada en el MIP), ha comenzado a ocupar el lugar de los viejos partidos. Ambos movimientos han logrado instituir representaciones políticas propias, poniendo en cuestión el modelo histórico de construcción del estado y la ciudadanía en Bolivia. Las organizaciones indígenas han logrado convertirse en sujetos políticos con voz propia, disputando un espacio de representación que hasta ahora solamente había estado restringido a organizaciones que hablaban en nombre de los indios, en medio de una situación generalizada de incertidumbre política.

4. Perú

Debido a la ausencia de un movimiento étnico semejante a los que existen en Ecuador y Bolivia, el caso del Perú ha sido visto como ejemplo de una anomalía.¹³ Sin embargo, si se observa con más detalle la experiencia peruana, así como la de los países vecinos, se puede notar que en todos los casos se han manifestado similares procesos y tendencias (ya sea a la formación de una conciencia étnica explícita, a la negación a ser considerado “indio” por la fuerte estigmatización que ello implica, a la imposición *desde arriba* de un modelo homogeneizador basado en el viejo paradigma del mestizaje y la integración, o a las más recientes tendencias internacionales favorables a la promoción estatal de las diferencias). Lo que hay es una serie de semejanzas y diferencias entre los países, relacionadas a la diferente magnitud e intensidad de cada uno de esos procesos y tendencias.

En la sierra peruana –a diferencia de lo ocurrido en la sierra de los otros dos países- no se ha desarrollado una tendencia a una identificación étnica que pudiese expresarse en la formación de organizaciones étnicas. Se trata, ciertamente, de una diferencia importante, pero que no expresa necesariamente un “retraso” ni un “descolocamiento”, sino que responde a la peculiaridad de los procesos particulares ocurridos en dicha región, procesos que deben ser explicados considerando el engranaje de factores coyunturales y de largo plazo, así como la articulación de las realidades locales y

¹³ Xavier Albó, por ejemplo, señaló en un famoso artículo que el Perú se hallaba retrasado respecto a sus vecinos del norte y del sur, debido a la ausencia de un movimiento étnico semejante (Albó, 1991: 300). Más recientemente, este mismo autor ha señalado que el Perú “se ha descolocado del resto de la región en el reciente despertar de la conciencia étnica” (Albo, 2003: 218).

regionales con los contextos más amplios –nacionales e internacionales- que influyen sobre ellos.¹⁴

En la amazonía peruana se observa muy tempranamente (desde mediados de la década del 60) la acción de una tendencia favorable al despertar de una conciencia étnica, que se asemeja bastante a la que también venía operando entonces en la amazonía del Ecuador. Fue así como se formaron las primeras organizaciones indígenas, como el Congreso Amuesha y la Federación Aguaruna-Huambisa. Posteriormente, durante la década del 70, en toda la amazonía se constituyeron nuevas organizaciones indígenas, que se agruparon posteriormente en dos centrales nacionales: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP) y la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana (CONAP). Actualmente, existen centenares de organizaciones indígenas amazónicas de primer grado, y alrededor de 70 federaciones regionales en toda la región. Sin embargo, la fragmentación territorial del país -bastante mayor que en el caso del Ecuador-, la indiferencia predominante ante las demandas indígenas, así como la ausencia de un interlocutor étnico en la sierra, han sido alguno de los factores que han impedido al movimiento amazónico convertirse en un actor de proyección nacional. En contraste con ello, en la amazonía boliviana las organizaciones son bastante más tardías, y se formaron en gran medida siguiendo la experiencia de las organizaciones amazónicas peruanas y ecuatorianas.

Otro fenómeno con diferentes intensidades en los tres países es el indianismo. Mientras que en Ecuador esta tendencia siempre ha sido minoritaria, en Bolivia y el Perú logró articular a ciertos sectores. En Perú, en 1980 se formó el Consejo Indio de Sudamérica (CISA), con sede en Lima y pensado como base regional del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas. Durante los años siguientes, esta organización manejó un discurso indianista radical, pero no llegó a desarrollar bases sociales reales. Posteriormente, como resultado de graves disputas y divisiones, sus miembros se dispersaron.

Una etnicidad invisible

Recién desde 1990 la política peruana presenta elementos étnicos explícitos. En las elecciones de ese año, la imagen del “chino” Fujimori fue identificada con los “pobres” y “cholos”, por oposición a los “blancos” y “ricos” representados por Mario Vargas Llosa. Antes de dicha elección, los elementos étnicos prácticamente han estado ausentes de la política.

Una de las razones de largo plazo de esta ausencia es que durante mucho tiempo los sectores indígenas fueron sistemáticamente excluidos del acceso a la ciudadanía. Desde la fundación de la República en 1821, la participación en la vida política estuvo restringida a un pequeño grupo de notables, los cuales calificaban como *ciudadanos* debido a su riqueza y al hecho de tener un origen social no indígena.

Esta situación comenzó a cambiar lentamente desde la segunda década del siglo XX, a medida que se fueron conformando nuevos sectores sociales -capas populares urbanas y clases medias- que durante las décadas siguientes fueron rompiendo la hegemonía

¹⁴ En torno a las razones de la inexistencia de un movimiento étnico en la sierra peruana, han sido formuladas distintas hipótesis, pero que no están suficientemente respaldadas por alguna investigación empírica. Al respecto véase: Sánchez (1994, 1996), Degregori (1993, 1999), Tanaka (2003) .

política de los notables. Se permitió así el voto de las mujeres, y solamente desde 1979 la Constitución Política reconoció el derecho al voto de los analfabetos (en su gran mayoría de origen indígena).

Debido al racismo imperante, a lo largo de los siglos XIX y XX la condición indígena se convirtió en un estigma físico y cultural. Ser indio terminó siendo sinónimo de “pobre”, “siervo” y “analfabeto”, debido al entrelazamiento de las jerarquías sociales y las diferencias étnicas. De allí que a fines de la década del 60 e inicios del 70, los primeros antropólogos interesados en el tema étnico encontraron que los indios eran invisibles: siempre se hallaban “más allá”, pues todos preferían ser campesinos.

La otra cara de la exclusión política de la población indígena fue la ausencia de políticas estatales referidas a su condición étnica. A lo largo del siglo XIX y durante buena parte del siguiente, los indios, a pesar de representar la inmensa mayoría de la población, resultaron invisibles para el estado. Fue recién durante el gobierno de Leguía que se implementaron algunas acciones dirigidas a solucionar lo que entonces se denominó como el “problema indígena”. Algunos chispazos posteriores de real apertura estatal a la temática étnica, ocurrieron durante el gobierno de Velasco, durante el cual se aplicó la reforma agraria y se reconocieron los idiomas indígenas y las comunidades nativas. Pero aún entonces, el horizonte principal de la acción estatal fue el campesinismo.

Las principales organizaciones agrarias: la CCP y la CNA –creadas en 1946 y 1974, respectivamente- tuvieron siempre un claro sesgo campesino, que invisibilizaba cualquier atisbo de etnicidad. La acción de estas dos organizaciones afianzó la valoración de la conciencia campesina (entendida en términos de clase) en desmedro de cualquier componente étnico. De esa forma, las organizaciones campesinas de izquierda reprodujeron el desprecio hacia lo indio propio de los antiguos mistis.

La peculiar apertura étnica del toledismo

Durante las elecciones del 2000 y 2001, una década después del fenómeno del “chino” Fujimori, los símbolos étnicos se convirtieron nuevamente en un importante recurso político. Esta vez, uno de los candidatos, el “cholo” Toledo, movilizó una fuerte adhesión que estuvo acompañada por el recurso a distintos símbolos étnicos andinos, como la chakana, la wiphala, la coca, el quechua, y hasta la imagen del Inca Pachacútec.

Una vez elegido, Toledo inauguró su mandato con una ceremonia propiciatoria realizada en Machu Picchu, donde además firmó una declaración comprometiéndose a impulsar los derechos de los pueblos indígenas.

Sin embargo, lo ocurrido posteriormente ha demostrado la enorme distancia existente entre el uso simbólico de elementos étnicos y la ausencia de una verdadera voluntad política en defensa de los derechos indígenas. El gobierno de Toledo representa, pues, un tipo de apertura étnica peculiar, motivada no tanto por la existencia de presiones desde abajo por parte de los movimientos étnicos, sino por la existencia de un contexto internacional favorable a la promoción de los asuntos étnicos desde el estado. Así puede ser comprensible cómo por un lado se ensalzan los símbolos étnicos, mientras que por otro se fomenta una economía de mercado que amenaza los territorios de diversos pueblos a través de concesiones petroleras inconsultas.

La acción más significativa del gobierno fue la creación de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA), en octubre del 2001. Sin embargo, el desempeño de esta institución ha tenido el efecto contrario al esperado. En torno a ella, se han generado divisiones que han terminado por fragmentar la débil articulación que habían conseguido las distintas organizaciones indígenas del país.¹⁵ De otro lado, desde el 2003 se fueron incremento las denuncias públicas referidas a la ineficiencia institucional, así como al manejo personal de dicha institución por parte de la primera dama, Eian Karp. Durante los meses posteriores, estas denuncias se convirtieron en noticia pública y han generado investigaciones (como la del Congreso) que parecen convalidar la existencia de graves irregularidades administrativas.

En síntesis, el peculiar etnicismo del gobierno de Toledo parece responder al clima internacional proclive a la apertura étnica estatal. Se trata de una apertura étnica efectuada desde arriba, que se halla en búsqueda de los sujetos a quienes representar. Es decir que mientras en Ecuador y Bolivia existentes movimientos indígenas que logran relacionarse de diversas formas con el estado, en el Perú lo que hay es un estado en búsqueda de movimiento indígena.

5. Reflexiones finales

Durante la última década, la tesis del colapso de los estados viene siendo utilizada de manera creciente para describir la situación política de diversas áreas del mundo. Hasta hace poco, el uso de esta idea estaba restringido a ciertos círculos académicos, pero actualmente ha logrado rebasar las fronteras académicas y se ha convertido en una explicación utilizada con cierta frecuencia por los políticos y por la prensa, con la finalidad de hacer comprensible la situación de diversos países aquejados por agudas crisis económicas, desarticulación social, bloqueos políticos y falta de alternativas políticas. También se ha convertido en un instrumento para el diseño de políticas por parte de gobiernos y asesores políticos en diversos lugares del mundo.

Aunque dicho concepto se ha aplicado sobre todo a ciertos países africanos –como Sierra Leona, Sudán, Angola o Somalia- también se ha usado para referirse a países de otros continentes, como Líbano, Afganistán, Yugoslavia. Algunos han pensado que podría ser el caso de Colombia y Haití.

También, se ha empezado una variedad de dicho concepto: la idea de estados fracasados, para describir aquellas situaciones de colapso estatal de menor gravedad. Se

¹⁵ En 1997, por iniciativa de la Universidad San Antonio de Abad, se reunieron en Cusco diversos gremios agrarios, campesinos e indígenas, conformándose así la Conferencia de Pueblos Indígenas del Perú (COOPPIP). Desde entonces, esta organización ha venido impulsando la formación de un movimiento indígena en el Perú, convirtiéndose en un importante interlocutor entre las organizaciones indígenas, el estado y diversos organismos internacionales. En agosto del 2001 se realizó en Lima el Segundo Congreso Nacional de COOPIP. Dicho Congreso fue la ocasión para un primer acercamiento entre las organizaciones de la COOPIP y Eian Karp, la primera dama de la nación. En dicha reunión, Karp prometió que el gobierno pensaba crear una instancia dedicada específicamente al tratamiento de los problemas indígenas. Posteriormente, luego de la creación de la CONAPA, surgieron discrepancias entre las organizaciones de la COOPIP en torno a la participación en dicha institución, que han culminado con su separación.

sostiene que podría ser el caso de varios países latinoamericanos, como Argentina y Colombia, así como los tres países centroandinos que son objeto de este análisis (Ecuador, Perú y Bolivia).

A contrapelo de esa imagen, lo que este trabajo muestra son estados y democracias en transformación. Uno de los factores de esa transformación es el desarrollo de un proceso de movilización étnica que ha generado nuevos actores políticos protagónicos: los sujetos colectivos indígenas representados por organizaciones y movimientos políticos autodefinidos étnicamente. Esto no ocurre así en el Perú, debido a que en este país no existe un movimiento étnico con las dimensiones de los que se registran en Ecuador y Bolivia. Pero el factor étnico no deja de jugar un rol en la política.

En los países en que se han desarrollado, los movimientos indígenas han logrado jugar un papel político protagónico que constituye un aporte a la consolidación democrática. En contraste con lo que ocurre en otras áreas del mundo, donde los movimientos étnicos han acarreado el estallido de conflictos violentos, en los países andinos conllevan un tipo de identificación más permisiva, que discurre a través del reclamo de pertenencia a la nación. Apelan simultáneamente a un sentido de identificación étnica y de pertenencia nacional que sustenta su movilización política.

Es en el caso ecuatoriano que el sistema político muestra un mayor grado de incorporación de las demandas étnicas. En Bolivia, dicho proceso ha sido más enrevesado, debido a que no existe un grado de centralidad del movimiento indígena semejante al ecuatoriano, lo cual ha acarreado –sobre todo durante los últimos años– mayores niveles de conflictividad.

En dicho contexto, el caso peruano constituye una peculiaridad. No sólo porque las organizaciones y movimientos indígenas no han alcanzado el grado de organización y reconocimiento público que se observa en los otros países. También, porque mientras que en Ecuador y Bolivia los estados se han visto confrontados por la emergencia étnica, en el Perú se ha generado una situación inversa: una suerte de estado en búsqueda de movimiento indígena, que en realidad reproduce viejas formas de tutelaje y paternalismo.

BIBLIOGRAFÍA

Archondo, Rafael, *Cercados pero despiertos. Bolivia después del 30 de junio de 2002*. La Paz: La Epoca-Eureka, 2003.

Barsky, Oswaldo, *La reforma agraria ecuatoriana*. Quito, Corporación Editora Nacional, 1988.

Calderón, Fernando (coord.), *Política y sociedad en el espejo*. La Paz: PNUD-Plural Editores, 2002.

CONAIE, *Las nacionalidades indígenas en el Ecuador. Nuestro proceso organizativo*. Quito, CONAIE, 1989.

CONAIE, *Proyecto político de la CONAIE*. Quito, CONAIE, 1994.

Degregori, Carlos Iván 1993 "Identidad étnica, movimientos sociales y participación política en el Perú", en Varios, *Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos*. IEP-IFEA, Lima.

Degregori, Carlos Iván 1999 "Estado nacional e identidades étnicas en Perú y Bolivia", en Kees Konings y Patricio Silva (editores), *Construcciones étnicas y dinámica sociocultural en América Latina*. Quito, Ediciones Abya Yala, pp. 157-181.

ECUARUNARI, *Quichua Runacunapaq Huñicausai. Historia de la nacionalidad y los pueblos quichuas del Ecuador*. Quito, ECUARUNARI-ILDIS-CODENPE, 1998.

García Linera, Alvaro y otros, *Tiempos de rebelión*. La Paz: Comuna, 2001.

García Linera, Alvaro y otros, *El retorno de la Bolivia plebeya*. La Paz: Comuna, 2000.

Guerrero, Andrés, "De sujetos indios a ciudadanos-étnicos: de la manifestación de 1961 al levantamiento indígena de 1990", en Alberto Adrianzén y otros, *Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos*. Lima, IFEA-IEP, 1993.

Hurtado, Javier, *El katarismo*. La Paz: Ed. Hisbol, 1986.

Laserna, Roberto y otros, *Piedras en el camino. Movimientos sociales de 2000 en Bolivia*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, 2002.

León, Jorge, "Conflicto étnico, democracia y estado", en *Iconos* N° 10. Quito, FLACSO, abril de 2001.

O'Donnell, Guillermo, "Notas sobre la democracia en América Latina", en *La democracia en América Latina: el debate conceptual sobre la democracia*. Lima, PNUD, 2004.

O'Donnell, Guillermo, "Estado, democratización y ciudadanía", en *Nueva Sociedad* N° 128. Caracas, Noviembre-Diciembre de 1993.

PNUD, *La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas*. Lima, PNUD, 2004.

Pinto, Miguel (coord.), *Lecciones del levantamiento popular del 12 y 13 de febrero*. La Paz: Central Obrera Departamental de La Paz, 2003.

Rivera Cusicanqui, Silvia, *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia, 1900-1980*. La Paz, CSUTCB-HISBOL, 1983.

Sánchez, Rodrigo 1996 "Evolución agraria y protagonismo indígena: los casos de Perú y Ecuador", en *Revista de sociología* Vol 9, N° 10. Lima, UNMSM.

Sánchez, Rodrigo 1994 "Procesos culturales e identidad étnica en Ecuador y Perú", en *Allpachis*, Año XXVI, N° 43/44, Cusco.